

lar: Políticas y alternativas en el agro - En el año de la agricultura
ativas en el agro - En el año de la agricultura familiar: Políticas
año de la agricultura familiar: Políticas y alternativas en el agro
familiar: Políticas y alternativas en el agro - En el año de la agricu
ernativas en el agro - En el año de la agricultura familiar: Polit.
En el año de la agricultura familiar: Políticas y alternativas en
ultura familiar: Políticas y alternativas en el agro - En el año de
as y alternativas en el agro - En el año de la agricultura familiar
agro - En el año de la agricultura familiar: Políticas y alternativ
la agricultura familiar: Políticas y alternativas en el agro - En

AMERICA LATINA *en movimiento*

496



junio 2014

familiar: Políticas y alternativas en el agro - En el año de la agricu
ernativas en el agro - En el año de la agricultura familiar: Polit.
En el año de la agricultura familiar: Políticas y alternativas en
ultura familia **En el año de la agricultura familiar:**
as y alternativ **Políticas y alternativas en el agro**
agro - En el a **Políticas y alternativas en el agro**
la agricultura familiar: Políticas y alternativas en el agro - En
iar: Políticas y alternativas en el agro - En el año de la agricult
ativas en el agro - En el año de la agricultura familia **aloi**
año de la agricultura familiar: Políticas y alternativas en el agro
familiar: Políticas y alternativas en el agro - En el año de la agricu
ernativas en el agro - En el año de la agricultura familiar: Polit.

AMERICA LATINA en movimiento

Edición digital

496

junio 2014
año XXXVIII, II época

Ilustración de portada

Marcha Fuera Monsanto - México

Fuente: www.biodiversidadla.org

**Publicación internacional de
análisis y opinión de la Agencia
Latinoamericana de Información**

ISSN No. 1390-1230

Director: Osvaldo León

ALAI: Dirección postal
Casilla 17-12-877, Quito, Ecuador

Sede en Ecuador
Av. 12 de Octubre N18-24 y Patria,
Of. 503, Quito-Ecuador
Telf: (593-2) 2528716 - 2505074
Fax: (593-2) 2505073

URL: <http://alainet.org>

Redacción:
info@alainet.org

Suscripciones y publicidad:
alaiadmin@alainet.org

ALAI es una agencia informativa, sin fines de lucro, constituida en 1976 en la Provincia de Quebec, Canadá.

Las informaciones contenidas en esta publicación pueden ser reproducidas a condición de que se mencione debidamente la fuente y se haga llegar una copia a la Redacción.

Las opiniones vertidas en los artículos firmados son de estricta responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de ALAI.

Suscripción versión impresa (10 números anuales)

	Individual	Institucional
Ecuador*	US\$ 28	US\$ 33
A. Latina	US\$ 60	US\$ 80
Otros países	US\$ 75	US\$ 140

* incluye IVA

Cómo suscribirse:

www.alainet.org/revista.phtml
se aceptan pagos por Internet

- 1** El año de la Agricultura Familiar Campesina Indígena
Osvaldo León
- 3** Reforma Agraria Popular:
Una alternativa al modelo del capital
João Pedro Stedile y Osvaldo León
- 6** El impacto de la producción agroindustrial sobre el derecho a la alimentación
Micòl Savia
- 9** Agricultura Campesina
Horacio Martins de Carvalho
- 14** La agricultura campesina en Ecuador y sus potencialidades
François Houtart
- 17** Conflicto agrario y movimiento campesino en Paraguay
Elsy Vera
- 21** Zapata vive, la lucha sigue...
En un campo que resiste
Emilio García
- 25** Declaración de Movimientos y Organizaciones Sociales ante 33va. Reunión FAO-ALC
- 28** CLOC VC: Después de 20 años de luchas, grandes desafíos
Diego Montón y Deo Carrizo

El año de la Agricultura Familiar Campesina Indígena

Oswaldo León

En el marco de la crisis alimentaria, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), con el objetivo general de “promover la conciencia internacional y apoyar los planes impulsados por los países para fortalecer la contribución de la agricultura familiar y los pequeños agricultores a la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza rural, conduciendo así al desarrollo sostenible de las zonas rurales y la seguridad alimentaria”.

En tal sentido, el AIAF apunta a reposicionar este segmento en las políticas agrícolas, ambientales y sociales de las agendas nacionales, regionales y globales por su aporte significativo a la producción mundial de alimentos, a la preservación de alimentos tradicionales, a la generación de empleo y mitigación de la pobreza, a la conservación de la biodiversidad y tradiciones culturales.

A la Agricultura Familiar se la presenta como “una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la granja están vinculados, co-evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales”.

Disputa de sentidos

Como no podía ser de otra manera, la propia denominación del Año Internacional de la Agricultura Familiar suscita cuestionamientos. Por ejemplo, Gustavo Duch pregunta: “¿Es el apelativo familiar la mejor definición para

trazar la línea que separa la agricultura de las sociedades anónimas, las cotizaciones en bolsa y las semillas esterilizadas de la agricultura campesina de los mercados locales y de la biodiversidad cultivada? ¿Es suficiente definirla como aquella actividad agraria operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluido tanto a mujeres como hombres? La familia, ¿es el único modelo para desarrollar agricultura campesina a pequeña escala?”¹.

Cuestionamientos que, en el fondo, hacen parte de la disputa de sentidos que se está librando en diversos planos respecto al AIAF, porque éste -como suele acontecer con los eventos que propicia la ONU- contribuye a visibilizar debates que se mantenían en sordina por obra y gracia de la conjunción de los poderes fácticos con el mediático.

En la dinámica de las corporaciones para subordinar la agricultura mundial a sus intereses, aparece un relato cuyo eje es “incorporar” la agricultura familiar a su cadena productiva. Y es lo que están negociando en las instancias oficiales. Es así que en la 37 reunión anual del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), realizada en Roma (19-20, febrero 2014), esta entidad presentó como un primer logro del AIAF la suscripción de un convenio con Unilever, destacando que ambas organizaciones se guían por principios similares y comparten objetivos y compromisos en torno a la agricultura familiar.

Como reseña un comunicado del FIDA, el Director Ejecutivo de Unilever, Paul Polman, “resaltó cómo conectar mejor a las multina-

¹ La agricultura desposeída de la tierra, <http://alainet.org/active/74283>

cionales, pequeñas y medianas empresas con los pequeños agricultores, de manera recíprocamente beneficiosa y productiva”. Unilever es una transnacional agroalimentaria que opera en 100 países, con materia prima en la que abundan transgénicos y agrotóxicos, conservantes y químicos, y que es cuestionada por encubrir trabajo infantil y precarizado. ¿Serán, acaso, tales las condiciones mínimas para quienes opten por “incorporarse” a la oferta “beneficiosa y productiva” que propone el Director Ejecutivo de Unilever?

“La idea de la ‘integración’ de los agricultores familiares a la cadena agroindustrial global supone un libre mercado en el que todos podemos competir y donde las reglas son ‘claras’”, señala un pronunciamiento de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - Vía Campesina (CLOC-VC)²; para luego añadir: “Veamos algunos datos: con tan solo ¼ de las tierras arables del mundo, los campesinos y campesinas alimentamos al 70% de la población mundial, y según la FAO, más del 40% de los alimentos de la cadena agroindustrial se pierden por descomposición. El 90% del mercado mundial de granos está en manos de cuatro corporaciones: ABC, Bunge, Cargil y Dreyfus”.

Monsanto, acota el documento, “controla el 27% del mercado global de semillas, y junto con otras 9 corporaciones más del mercado de agrotóxicos. Esta concentración les permite presionar especulativamente para que los precios de los commodities aumenten sistemáticamente. Además su estrecha alianza con la banca internacional les permite disponer de enormes masa de capital de origen especulativo que se utiliza para el acaparamiento de tierras, lobby y presión a los gobiernos del mundo, la corrupción, etc. ¿De qué mercado libre nos hablan? El ‘mercado’ es rehén de las corporaciones y el capital financiero”.

Por lo mismo, subraya: “si sumamos al mono-

polio, los problemas de pérdida de biodiversidad y crisis ambiental provocada por grandes extensiones de monocultivos, los problemas graves de salud y contaminación por miles de millones de toneladas de agrotóxicos que fumigan indiscriminadamente, el trabajo esclavo, el uso indiscriminado de combustibles fósiles, la destrucción de mercados locales, entre otros, aparece con claridad que no es posible armonizar agricultura campesina, con la agricultura de las corporaciones, así como no será posible terminar con el Hambre de la mano de ese sistema nacido con la revolución verde”.

Consecuentemente, la CLOC-VC afirma, “tenemos claridad: que el sistema del capital financiero para el campo es la agricultura industrial en manos de las corporaciones transnacionales y eso es totalmente contradictorio con la Soberanía Alimentaria y la Agricultura Familiar Campesina Indígena”.

En un texto referido a las cualidades de la agricultura familiar, Jan Douwe van der Ploeg³ establece que entre las amenazas internas consta la tendencia a ingresar en procesos empresariales que afecta la continuidad y virtuosidad de la agricultura familiar; sin embargo, destaca que existen tendencias importantes que corren en sentido contrario.

“Muchos predios familiares se están fortaleciendo e incrementado su renta con el empleo de principios agroecológicos, con la participación en nuevas actividades económicas o con la producción de nuevos productos y la prestación de nuevos servicios que son en general distribuidos y ofrecidos a través de nuevos mercados, socialmente construidos”, dice. Para luego acotar que “estas nuevas estrategias se definen como formas de recampesinización, que buscan restaurar la naturaleza campesina de la agricultura al fortalecer el predio familiar. La recampesinización es, por tanto, una forma de defender y fortalecer la agricultura familiar”. ☞

2 La CLOC Vía Campesina en el Año Internacional de la Agricultura Familiar
<http://alainet.org/active/72077&lang=es>

3 Dez qualidades da Agricultura Familiar,
<http://alainet.org/active/71672&lang=es>

Una alternativa al modelo del capital

João Pedro Stedile y Osvaldo León

Desde la década de los '80, nos encontramos en una nueva fase del capitalismo hegemónizada por el capital financiero y las transnacionales, que pasaron a controlar la producción de las principales mercancías y el comercio mundial, suscitando cambios estructurales en la producción agrícola.

Este control del capital financiero sobre los bienes, que circula en el mundo en proporciones cinco veces mayor a su equivalente en la producción (255 billones de dólares en moneda, para tan sólo 55 billones de dólares en bienes anuales), transformó los bienes de la naturaleza -como la tierra, el agua, la energía, los minerales- en meras mercancías bajo su control. Y es por eso que se ha producido una enorme concentración de la propiedad de la tierra, de los bienes de la naturaleza y de los alimentos.

En efecto, actualmente alrededor de 100 empresas agroalimentarias transnacionales (como Cargill, Monsanto, Dreyfus, ADM, Syngenta, Bunge, etc.) controlan la mayor parte de la producción mundial de fertilizantes, agroquímicos, pesticidas, agroindustrias y el mercado de alimentos. Porque ahora, los alimentos se venden y especulan en las bolsas de valores internacionales, como cualquier materia prima (hierro, petróleo, etc.), y los grandes inversionistas financieros adquieren millones de toneladas de alimentos para especular. Millones de toneladas de soja, maíz, trigo, arroz, hasta zafras venideras, ni siquiera sembradas, de 2018, ya están vendidas. O sea, esos millones de toneladas de granos que no existen, ya tienen dueño.

A este modelo de producción que el capital está implementando en todo el mundo se le conoce como el agronegocio (*agribusiness*) que, básicamente, busca organizar la producción agrícola en forma de monocultivo en escalas de extensiones cada vez mayores, con uso intensivo de máquinas agrícolas y de agrotóxicos, y la creciente utilización de semillas transgénicas.

De modo que esta matriz productiva del agronegocio es socialmente injusta, pues cada vez más expulsa a la mano de obra del campo; es económicamente inviable, pues depende de la importación de millones de toneladas de fertilizantes químicos; está subordinada a las grandes corporaciones que controlan las semillas, los insumos agrícolas, los precios, el mercado y que se quedan con la mayor parte de las ganancias de la producción agrícola; es insostenible para el medio ambiente, pues practica el monocultivo y destruye toda la biodiversidad existente en la naturaleza, con el uso irresponsable de agrotóxicos que destruyen la fertilidad natural de los suelos y sus microorganismos, contaminan el medio ambiente y, sobre todo, los alimentos producidos, con consecuencias gravísimas para la salud de la población.

En Brasil, el Instituto Nacional del Cáncer (Inca) advirtió en febrero que se pronostica para este año 546.000 nuevos casos de cáncer en el país, la mayor parte originada por alimentos contaminados con pesticidas, sobre todo cáncer de mama y de próstata, ya que son las células más frágiles donde los principios activos de los venenos químicos actúan.

Soberanía alimentaria

Ante este modelo del agronegocio que busca la producción de dólares y commodities, y no de alimentos, precisamos urgentemente renegociar en todo el planeta el principio de que los alimentos no pueden ser una mercancía. La alimentación es un derecho de supervivencia, por lo que cada ser humano debe tener acceso a esta energía para reproducirse como un ser humano, de manera equitativa y sin ningún tipo de restricción.

En la Vía Campesina hemos desarrollado el concepto de soberanía alimentaria, que es la necesidad y el derecho de que en todos los lugares del mundo cada pueblo tiene el derecho y el deber de producir sus propios alimentos. Es de este modo que se ha garantizado la supervivencia de la humanidad, incluso en las condiciones más difíciles. Y está demostrado biológicamente que en todas partes de nuestro planeta se puede producir alimentos para la reproducción humana, a partir de las condiciones locales.

La cuestión clave es cómo garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Y para eso tenemos que defender la necesidad de que todos los que cultivan la tierra y producen los alimentos, los agricultores, los campesinos, tengan el derecho a la tierra y al agua; como derecho de los seres humanos. De ahí la necesidad de la política de repartición de los bienes de la naturaleza (tierra, agua, energía) entre todos, lo que llamamos reforma agraria.

Precisamos garantizar que haya soberanía nacional y popular sobre los bienes fundamentales de la naturaleza. No podemos someterlos a las reglas de la propiedad privada y del lucro. Los bienes de la naturaleza no son fruto del trabajo humano. Por lo mismo, el Estado, en nombre de la sociedad, debe supeditarlos a una función social, colectiva, bajo el control de la sociedad.

Tenemos que asegurarnos de que las semillas,

las diferentes razas de animales y sus mejoras genéticas hechas por la humanidad, a lo largo de la historia, sean accesibles a todos los agricultores. No puede haber propiedad privada de las semillas y los seres vivos, como nos impone la fase actual del capitalismo con sus leyes de patentes, transgénicos y mutaciones genéticas. Las semillas son un patrimonio de la humanidad.

En cada localidad, región, es preciso asegurar que se produzcan los alimentos necesarios que proporciona la biodiversidad local, a fin de preservar los hábitos alimenticios y la cultura local, como una cuestión inclusive de salud pública. Los científicos, médicos y biólogos nos dicen que la alimentación de los seres vivos, para su reproducción saludable, debe estar en armonía con el hábitat y la energía local.

Necesitamos políticas gubernamentales que fomenten la práctica de técnicas agrícolas de producción de alimentos, que no sean predatorias de la naturaleza, que no utilicen venenos y que produzcan en armonía con la naturaleza y la biodiversidad, y en abundancia para todos. A estas prácticas es lo que llamamos agroecología.

Precisamos impedir que las empresas transnacionales continúen controlando cualquier parte de la producción de los insumos agrícolas, la producción y distribución de los alimentos. Y a la vez, avanzar en la adopción de prácticas de comercio internacional de alimentos entre los pueblos, basadas en la solidaridad, la complementariedad y el intercambio. Y no más en el oligopolio de empresas, dominado por el dólar estadounidense.

Además, cabe al Estado desarrollar políticas públicas que garanticen el principio de que la comida no es una mercancía, que es un derecho de todos los ciudadanos. Y la gente sólo vive en sociedades democráticas, con sus derechos mínimos garantizados, si tiene acceso al alimento-energía necesario.

Un nuevo modelo de producción

Bajo la hegemonía de este modelo del agronegocio, en Brasil asistimos a un proceso acelerado de concentración de la propiedad de la tierra y de la producción agrícola y los bienes de la naturaleza están cada vez más concentrados en manos de menos capitalistas. Hubo una avalancha de capital extranjero y financiero para controlar más tierra, más agua, más agroindustrias y prácticamente todo el comercio exterior de los commodities agrícolas.

Además, con este modelo del agronegocio, se ha afianzado una alianza ideológica de clases entre los grandes terratenientes y empresarios de los medios de comunicación, especialmente la televisión, revistas y periódicos, que se han tornado en promotores y propagandistas permanentes de las empresas capitalistas en el campo, como único proyecto posible, moderno e insustituible. Hay una simbiosis entre los grandes propietarios de medios de comunicación, las empresas del agronegocio, los presupuestos de publicidad y el poder económico.

En estas nuevas condiciones, la lucha por la tierra y por la reforma agraria cambió de naturaleza. Por eso, en el VI Congreso Nacional del MST, realizado el pasado mes de febrero, se adoptó el programa de Reforma Agraria Popular, porque ella interesa a todo el pueblo. Ya no es más una reforma agraria de los sin tierra, porque apunta a contribuir a los cambios estructurales necesarios para el conjunto de la sociedad.

Una política de reforma agraria no se reduce simplemente a la distribución de la tierra para los pobres, si bien puede ocurrir para resolver problemas sociales emergentes localizados. Se trata de un camino hacia la construcción de un nuevo modelo de producción en la agricultura. Es urgente la reorganización de la agricultura para producir, en primer lugar, alimentos sanos para el mercado interno y para toda la población brasileña. Para ello, es necesaria y urgente la implementación de políticas públicas que garanticen estímulos para una agricultura diversificada en cada bioma,

produciendo con técnicas de agroecología.

Al gobierno le corresponde destinar más recursos en la investigación agrícola para la alimentación y no solo para beneficiar a las transnacionales. Como también la puesta en marcha de un gran programa de implantación de agroindustrias pequeñas y medianas en la modalidad de cooperativas, para que los pequeños agricultores puedan tener sus agroindustrias a fin de agregar valor y crear mercado a los productos locales. Entre otras medidas.

Obviamente que la reforma agraria popular tomará más tiempo y será más difícil, porque vamos a tener que concientizar a la gente de la ciudad para que también se movilice, por ejemplo, por comida sana, por el etiquetado de los productos alimentarios que indique si contienen o no veneno, si tienen o no componente transgénico. Y, en general, por las contradicciones del agronegocio respecto a los alimentos, al cambio climático, al medio ambiente, al empleo.

Como señala el Programa del MST, ahora estamos ante nuevos desafíos, como:

- a) La reforma agraria popular debe resolver los problemas concretos de toda la población que vive en el campo;
- b) La reforma agraria tiene como base la democratización de la tierra, pero busca producir alimentos saludables para toda la población; objetivo que el modelo del capital no consigue alcanzar;
- c) La acumulación de fuerzas para este tipo de reforma agraria depende ahora de una alianza consolidada de los campesinos con los trabajadores urbanos. Solitos los sin tierra no conseguirán la reforma agraria popular;
- d) Ella representa una acumulación de fuerzas para los campesinos y toda clase trabajadora en la construcción de una nueva sociedad.” ☞

João Pedro Stedile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil.
Oswaldo León es Director de “América Latina en Movimiento”.

El impacto de la producción agroindustrial sobre el derecho a la alimentación

Micòl Savia

Hoy en día en el mundo se produce mucho más de lo suficiente para alimentar a toda la población, sin embargo, una de cada siete personas sufre de hambre crónica. En 2009, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) anunció la cifra vergonzosa de 1.020 millones de hambrientos. El 80% de ellos vive en zonas rurales: son campesinos, pequeños agricultores, trabajadores sin tierra, personas que viven de las actividades tradicionales de pesca, caza y pastoreo¹.

El hambre, como todos sabemos, no es un desastre natural, sino el resultado de políticas económicas deliberadamente impulsadas por los países capitalistas avanzados y sus instituciones financieras (Banco Mundial, OMC y FMI, o “jinetes del Apocalipsis” como las llama Jean Ziegler²) y de las cuales sólo se beneficia un puñado de grandes empresas transnacionales, en detrimento de los derechos humanos de grandes sectores de la población mundial.

La progresiva industrialización, privatización y liberalización del sector agroalimentario, y la creciente concentración de la cadena alimentaria en manos de unas pocas empresas privadas que persiguen como único fin el de maximizar sus ganancias, están destrozando perentoriamente el medio ambiente, al tiem-

po que condenan a muerte millones de ciudadanos. Los campesinos, privados de los recursos productivos básicos, como tierra, agua y semillas no alcanzan a producir siquiera lo necesario para sobrevivir. Y, por supuesto, no pueden alimentar al resto del mundo, que consecuentemente queda a merced de las multinacionales.

En 2012, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Shutter, presentó al Consejo de Derechos Humanos un informe³ en el que denuncia que los sistemas alimentarios actuales no sólo no han conseguido acabar con el hambre, sino que además promueven dietas malsanas que generan sobrepeso y obesidad, dos fenómenos que provocan aún más muertes en el mundo que un peso inferior al normal.

Los datos son muy alarmantes: “hoy en día más de 1.000 millones de personas de todo el mundo tienen sobrepeso, y al menos 300 millones son obesas. El sobrepeso y la obesidad ocasionan 2,8 millones de muertes cada año, de forma que, en la actualidad, el 65% de la población mundial vive en países (todos los países de ingresos altos y la mayoría de los países de ingresos medianos) en los que el sobrepeso y la obesidad ocasionan más muertes que un peso inferior al normal”. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, por primera vez los niños podrían tener esperanzas de vida inferiores a las de sus padres.

1 Estudio definitivo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la discriminación en el contexto del derecho a la alimentación (A/HRC/16/40)

2 Jean Ziegler, *Destrucción masiva, la Geopolítica del hambre*, Península, 2012.

3 Informe A/HRC/19/59, 2012

El aumento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres gastrointestinales y otras enfermedades relacionadas a la malnutrición, suele atribuirse a un “estilo de vida elegido”, es decir, a la decisión de hacer menos ejercicio físico y consumir más comida rápida. Pero, advierte De Shutter, no es así, “se trata de un problema sistémico. Hemos creado entornos generadores de obesidad y hemos diseñado sistemas alimentarios que, con frecuencia, se oponen a estilos de vida más sanos en vez de propiciarlos”.

Los gigantes del agroindustria, tras quitar la tierra a los campesinos del Sur, inundaron los supermercados de los países del Norte con productos altamente procesados, hipercalóricos y ricos en sal, azúcar y grasas saturadas: la llamada comida basura o chatarra. La distribución capilar y a precio barato de estos productos ha provocado un verdadero cambio nutricional en nuestras dietas.

Obesidad: la nueva amenaza

En la actualidad, en los países ricos, una alimentación sana que incluya una amplia variedad de frutas y verduras es más cara que una alimentación rica en aceites, azúcares y grasas. Este es sin duda uno de los factores responsables del aumento del sobrepeso y la obesidad, que de hecho afectan de manera desproporcionada a los más pobres. Estudios científicos demuestran una estrecha relación entre niveles bajos de educación y de ingresos y mayores tasas de obesidad, diabetes de tipo 2 y enfermedades coronarias.

Sin embargo, la obesidad y las enfermedades no transmisibles vinculadas a dietas poco sanas ya no son una exclusiva de los países ricos. Los países en desarrollo están viviendo un cambio rápido hacia el consumo de alimentos procesados, que suelen ser importados, y el abandono de las dietas tradicionales. Los alimentos de alta calidad, en particular verduras y frutas tropicales, se exportan al extranjero mientras que importan cereales refinados. Además, la mayor inversión extranjera

directa en la industria de procesamiento y la existencia de más supermercados provocan un aumento de estas enfermedades. “Por ejemplo, tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empresas estadounidenses aumentaron masivamente sus inversiones en la industria mexicana de procesamiento de alimentos (de 210 millones de dólares en 1987 a 5.300 millones en 1999) y las ventas de alimentos procesados en México se dispararon a una tasa anual de 5% a 10% entre 1995 y 2003. El aumento resultante en el consumo de refrescos y refrigerios entre los niños mexicanos es la causa de las muy elevadas tasas de obesidad infantil en el país”, señala De Shutter.

Las consecuencias son inexorables. Se calcula que, para 2030, en los países pobres 5,1 millones de personas morirán prematuramente cada año por enfermedades relacionadas con la malnutrición. Para las sociedades el coste de estas enfermedades es inmenso, tanto el coste directo (atención sanitaria) como el coste indirecto (pérdida de productividad). Ya actualmente en América Latina y el Caribe el costo sanitario por casos de diabetes se sitúa en 65.000 millones de dólares al año, o entre el 2% y el 4% del PIB⁴.

En su informe, Olivier De Shutter recomienda a los Estados varias medidas para promover dietas más sanas como, por ejemplo, aplicar impuestos a los refrescos y alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal o reexaminar los sistemas existentes de subsidios agrícolas. Y fue muy claro en su diagnóstico: “Solo se conseguirá una transición hacia dietas sostenibles apoyando distintos sistemas de explotación agrícola que permitan garantizar a todas las personas el acceso a dietas adecuadas y al mismo tiempo respaldar los medios de subsistencia de los agricultores pobres, y que sean sostenibles desde un punto de vista ecológico.”

A la misma conclusión llegaron otras agencias

4 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas (A/66/83)

internacionales como la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todas concuerdan: el cambio de rumbo es urgente. La comida no es una mercancía sino una fuente de vida.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está actualmente discutiendo un proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que viven en las zonas rurales. La discusión es complicada. Los Estados Occidentales, a pesar de las repetidas advertencias del Relator Especial sobre el Dere-

cho a la Alimentación y de otros expertos, se oponen al proyecto con fuerza. Sin embargo, los campesinos luchan con determinación. Su lucha por la tierra, el agua, las semillas, los medios de producción, la biodiversidad, etc., es nuestra lucha. Sin ellos no podemos sobrevivir.

Micòl Savia es abogada, representante permanente de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) ante las Naciones Unidas en Ginebra.

AMERICA LATINA *en movimiento*

La alternativa agroecológica

No. 487, julio de 2013

Sally Burch, Francisco Roberto Caporal,
ANAP Nacional, Miguel Ángel Núñez,
Adelita San Vicente Tello, Marlen
Haydee Sánchez, Maria Noel Salgado,
Judite Stronzake



Agricultura campesina

Horacio Martins de Carvalho

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en 2011, declaró al año 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). Esto se debe a que la agricultura familiar ha demostrado ser muy importante en todo el mundo, sobre todo por el hecho de que existen “(...) 1,5 mil millones de personas en 380 millones de establecimientos rurales, 800 millones con huertos urbanos, 410 millones en bosques y sabanas, 190 millones de pastores y más de 100 millones de pastores campesinos. Entre de todos ellos, 370 millones de indígenas. Juntos, estos 3 mil millones de agricultores familiares, campesinos e indígenas constituyen más de un tercio de la humanidad y producen el 70 % de los alimentos del mundo. Sí, la cifra es correcta: 70% de los alimentos del mundo “¹.

Reafirmo que los campesinos y campesinas son demasiado importantes para todas las sociedades contemporáneas de todo el mundo. Es posible sugerir que una sociedad sin campesinos y campesinas se vuelve incompleta, menos diversificada e históricamente árida por la ausencia de sectores de sus pueblos que se relacionan productiva, armoniosa y placenteramente con la naturaleza.

Cabe indicar que el término agricultura campesina, que utilizo como referencia general en este texto, abarcará una totalidad más amplia y diversificada de pueblos, o sea los pueblos campesinos, los pueblos indígenas o pueblos originarios, los pueblos negros o mulatos, los pueblos de las selvas (recolectores), los pueblos ribereños y los pueblos pescadores artesanales que son al mismo tiempo productores rurales. Este amplio espectro de pueblos que

se relacionan productiva y extractivamente con la tierra, y muchos de ellos a tiempo parcial con las aguas dulces, serán, entonces, aquí considerados como campesinos.

Según Costa “(...) entiendo como campesinos a aquellas familias que, teniendo acceso a la tierra y a los recursos naturales que ésta soporta, resuelven sus problemas de reproducción a partir de la producción rural - recolectora, agrícola y no agrícola, desarrollada de tal modo que no se diferencia entre el universo de los que deciden sobre la asignación del trabajo y los que sobreviven con el resultado de esta asignación”².

No es mi intención, sin embargo, homogenizar un universo altamente diversificado -económica, política, social y culturalmente- de productores y recolectores rurales presentes durante milenios en América Latina, ni suponer que las historias de los pueblos originarios latinoamericanos deban confundirse con las de los campesinos contemporáneos, sean éstos campesinos pobres inmigrantes procedentes de Europa o Asia, sean éstos nuevos campesinos que se constituyeron a partir de las diversas reformas agrarias llevadas a cabo en este continente. Y menos aún con la lógica de los colonizadores denominados blancos y civilizados por ser eurocéntricos, bendecidos por la Iglesia católica y portadores de verdades que suponen son universales.

Lo que deseo enfatizar es, en suma, que los campesinos latinoamericanos, entre tantos otros alrededor del mundo, han logrado, aunque con sufrimiento, persistir en su propósito de reproducirse social y culturalmente sin ser reducidos a una indigencia de tipo ‘pobreza

1 Heck, Silvino (2014). Ano da agricultura familiar, camponesa e indígena. In <http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79874> (consulta, 01 maio 2014, 20:10 horas).

2 Costa, Francisco de Assis (2008). A Especificidade Camponesa: um trajeto de pensamento que se projeta no futuro. Belém, NAEA, UFPA, mimeo 22 p. (p.6)

de reproducirse social y culturalmente sin ser reducidos a una indigencia de tipo 'pobreza activa'³ o, incluso, ser insertados subalternamente por clases dominantes burguesas, en una correlación de fuerzas económica y política que les es altamente desfavorable, en un mercado capitalista oligopólico que facilita la explotación de los campesinos por parte de las empresas agroindustriales capitalistas. No ignoro ni subestimo la presencia de una pobreza particular de los campesinos latinoamericanos, y de sectores de esos campesinos que adoptan como estrategia de supervivencia su integración a las empresas capitalistas.

Reiterando lo que escribí alguna vez: "(...) algunos de los factores que determinan esta explotación de los campesinos son: la vulnerabilidad de la producción agrícola debido a su carácter perecedero, la dispersión territorial de la producción, la oferta de productos en las cosechas (oferta simultánea de la mayoría de productores de una región determinada), el bajo volumen de la oferta de productos por cada unidad de producción campesina, su distancia física relativa de los principales centros comerciales y de la precariedad de la infraestructura de transporte en las zonas rurales. A esos factores de orden general se agrega otro: la precariedad de los negocios campesinos debido a su endeudamiento, que tiene como causas más comunes, por un lado, la artificialización de la agricultura (dependencias de los insumos adquiridos por los agricultores al agronegocio burgués) facilitada por el crédito rural subsidiado que entrega el gobierno federal y, por otro lado, la relación desfavorable entre los precios pagados y los precios recibidos por los campesinos. Sin duda alguna, estos factores no deben tapar posibles ineficiencias de algunos productores individuales"⁴.

Un modo de producción en construcción

La integración con las empresas capitalistas o la dependencia de los sistemas de producción campesinos a los insumos producidos por la agroindustria capitalista se ha convertido en una contingencia económica para los campesinos que los coloca dialécticamente, por un lado, frente a una realidad objetiva de contextos donde los campesinos se reproducen dentro de una formación económica y social dominada por el modo de producción capitalista y, por otro lado y al mismo tiempo los lleva a negar esa dominación, como un desafío político para intentar, por los medios más distintos, la superación de su posición subalterna al modelo de producción capitalista.

Destaco que las familias campesinas, más allá de tener acceso a la tierra, ya sea como propietarios, ocupantes, socios, arrendatarios, inquilinos o recolectores en tierras públicas y/o privadas intentan, sobre todo, en estas sociedades capitalistas contemporáneas, alcanzar una autonomía relativa frente al capital.

Es, entonces, en este sentido y contexto que prefiero no utilizar la expresión agricultura familiar para referirme a esos pueblos, no porque 'en sí' ella sea equivocada (como expresión idiomática), sino debido a que su uso actual en Brasil trae implícito en esta expresión, ahora como concepto, la tendencia hacia la integración y subordinación a la empresa capitalista.

Las observaciones anteriores sugieren, a mi modo de entender, que el campesinado (especialmente el brasileño) podría constituirse como un modo de producción en construcción⁵. Digo campesinado brasileño debido a

3 In Mollat, Michel (1989). *Os pobres na idade média*. Rio de Janeiro, Campus, ver referencia en las pp. 157/8.

4 Carvalho, Horacio Martins (2006). *Ah! Jacques, Jacques... liberte-se desse encantamento milenar*. Curitiba, mimeo, 19 p (cita extraída de la p. 5)

5 Modo de producción en construcción debido a la debilidad política e ideológica que las organizaciones y movimientos sociales campesinos, como instituciones de mediación de sus intereses, no asumen que los campesinos sean un modo de producción ni una clase social. Esta anomia política ante la población brasileña y las otras clases sociales los fragiliza polí-

que en varias otras formaciones económicas y sociales de América Latina los pueblos originarios (y aquí los pueblos denominados indígenas en el Brasil actual), en su mayor parte, desde sus orígenes como naciones, han establecido relaciones profundas con la tierra, con su madre tierra, siendo considerados como campesinos, independientemente de las formas de organización de la producción, distribución y consumo que históricamente tenían, constatándose en ellas la presencia de la familia singular y/o diversas formas de agrupamiento doméstico.

Es de uso relativamente común en Brasil la expresión “el modo de producir y de vivir de los campesinos”. Su sentido es poner de relieve que existe una especificidad campesina, que su reproducción social se rige por la dinámica interna propia de la unidad de producción campesina y no por la lógica de la reproducción social de la unidad de producción capitalista donde se da la relación social de producción asalariada.

La unidad de producción campesina contemporánea es diferente a la unidad de producción capitalista. Eso, cuando menos, permite suponer que en la “sociedad brasileña” coexisten contradictoriamente al menos dos modos de producción: el modo de producción capitalista y el modo campesino o modo de producir y vivir campesino, sin considerar aquí las organizaciones sociales indígenas no campesinizadas. Tal sociedad particular concreta se configura, entonces, como una formación socio-económica compleja, donde coexisten y se contradicen modos de producir distintos entre sí.

Al considerar como pertinente la afirmación anterior, no sólo para la formación económica y social brasileña, sino para muchas de las formaciones económicas y sociales latinoamericanas contemporáneas, y teniendo en cuenta que la mayoría de los modos de producción de los pueblos originarios está subordinada o en fase de integración subordinada al modo

tica y quizás conceptualmente.

de producción capitalista, y aun cuando en estas sociedades complejas están presentes las huellas de las culturas anteriores de esos pueblos, todo conduce a creer que un esfuerzo incansable debe desplegarse si se desea que el desarrollo de las fuerzas productivas no sea aquel que está determinado por los intereses de la reproducción ampliada de las empresas capitalistas.

Desafíos

Lo que trato de destacar es que se debe contemplar otro tipo de desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción para que sea posible y deseable que la agricultura campesina se mantenga altamente diversificada, no sólo económica sino sobre todo culturalmente. Y reafirmar mi opinión de que es responsabilidad de los campesinos, en cualquier tipo de sociedad, la producción de alimentos saludables básicos para el consumo de toda la población. Pero además cabe señalar que ellos ya se comportan como guardianes de la agrobiodiversidad⁶.

Sin embargo, en ese sentido, el propio campesino no debería depender de la agroindustria y de los supermercados en el abastecimiento de los principales rubros del consumo alimentario familiar. Redefinir qué parte de la producción de alimentos es para el auto consumo familiar, significa, además de una decisión en el campo de la producción y de aprovechamiento en la unidad campesina, también una decisión de autonomía relativa respecto de la industria de aprovechamiento y de artificialización de los alimentos.

La primera iniciativa campesina para reafirmarse como principal productor de alimentos sanos y como guardianes de la agrobiodiversidad sería la de retomar la capacidad y la voluntad política para producir alimentos para su propio consumo, sin que esa producción se limite a ese objetivo. En esta perspectiva, es

6 Carvalho, Horacio Martins (2013). O camponês, guardião da agrobiodiversidade. Curitiba, janeiro, mimeo, 16 p.

importante tener en cuenta que todo lo que fuere producido para el autoconsumo de la familia o multifamilias por la unidad de producción campesina (particular o asociada) debería también estar disponible en calidad, cantidad y presentación para la venta en los mercados locales, regionales o de otro tipo. Esto significa asumir que el campesino es el responsable social de la producción de alimentos.

Si los campesinos, como algunos de ellos lo hacen, optan por el modelo tecnológico de la producción capitalista, la tendencia será la aplicación de una agricultura (en sentido amplio) en la que el inmediatismo y artificialización se afirmen como práctica de producción en una praxis de autonegación campesina. Y dejarán de afirmarse como guardianes de la agrobiodiversidad para practicar el saqueo de los recursos naturales asumiendo que ése sería el camino del progreso o de la modernización, sin percibir que esa modernización, a partir de los valores burgueses, es socialmente excluyente y responsable de la intensa purga de los productores campesinos para que sus tierras sean apropiadas por las empresas capitalistas.

Este proceso dominante de la homogeneización de la agricultura conduce a la descomposición campesina debido a la negación de la diversificación de cultivos y criaderos, imponiendo como “moderno” la especialización basada en el monocultivo; induce a los campesinos a depender de los llamados insumos modernos, como las semillas transgénicas, la fertilización a partir de productos de origen industrial, el uso de agrotóxicos en lugar de la armonización entre flora, fauna, agua y minerales en el contexto de una producción antrópica y, en fin, rechaza la cultura campesina llena de historia y valores ancestrales. Las empresas capitalistas no desean que sus valores de vida (su forma de ser y de vivir) puedan convivir en una sociedad culturalmente plural: sus pretensiones son de dominación y hegemonía. Así que, reitero, son socialmente excluyentes.

Vale la pena repetir que los modernizadores

neoliberales, el neoclientelismo asistencial, el desmantelamiento de las políticas compensatorias y de protección de los campesinos y el “nuevo movimiento campesino” corporativista tienden, todos ellos, a la apología y defensa del “libre mercado”, sabiendo todos ellos de antemano que los espacios de los mercados oligopolizados por las grandes empresas multinacionales están cerrados para los campesinos. Predican, entonces, en nombre del realismo burgués, la superación del campesinado que consideran como un modo de producción obsoleto y anacrónico.


Sin embargo, los campesinos están presentes y ampliando su número y su participación en la economía mundial y latinoamericana. Más que la oferta de alimentos sanos y naturales, los campesinos muestran que su modo de producir y de vivir es diferente del modo de producción capitalista. Y, contrariamente a lo que sugiere la ideología dominante, sus valores y comportamientos frente a la sociedad y a la naturaleza muestran que es totalmente posible y deseable la afirmación de la diversidad económica, política, social y cultural que los campesinos enuncian y demuestran en su praxis social.

Como sugiere Bartra Vergés “(...) las organizaciones campesinas, principalmente las que en un principio eran realmente sectoriales, adoptan cada vez más las estrategias diversificadas, impulsando policultivos y múltiples usos, que suponen relaciones verticales, pero también una articulación horizontal que explota y potencializa la complementariedad de actividades múltiples y mixtas. Por lo tanto, no sólo los campesinos se recampesinizan para resistir a los vendavales del mercado, sino que también las organizaciones productivas del sector social pasan del modelo exclusivamente empresarial al abierto paradigma campesino...”⁷

7 Vergés, Armando Bartra (2011). *Os novos camponeses: leituras a partir do México profundo*. São Paulo, Cultura Acadêmica; Cátedra UNESCO de Educação do Campo e Desenvolvimento, cita p. 319.

“La comprensión de las trayectorias del desarrollo de la agricultura campesina a partir de sus luchas por la autonomía permite que sea resituada en el proceso histórico, evidenciando que el sentido de ese proceso no es unidireccional ni conducente a la disolución inexorable del campesinado, como siempre proclaman los defensores de la modernización de la agricultura. Por esta razón, la defensa de la agricultura campesina no puede en absoluto ser confundida con una propuesta del pasado. Por el contrario, ella indica caminos sólidos para que la crisis agraria sistémica que se profundiza y se extiende a todos los rincones del planeta sea estructuralmente enfrentada”⁸.

8 Peterson, Paulo. Agricultura campesina: entre

El escritor brasileño João Guimarães Rosa afirmó que “(...) las personas no mueren, ellas permanecen encantadas...”⁹ Yo diría entonces, apoyándome en Guimarães Rosa, que “los campesinos no mueren, permanecen encantados”. (Traducción ALAI) 

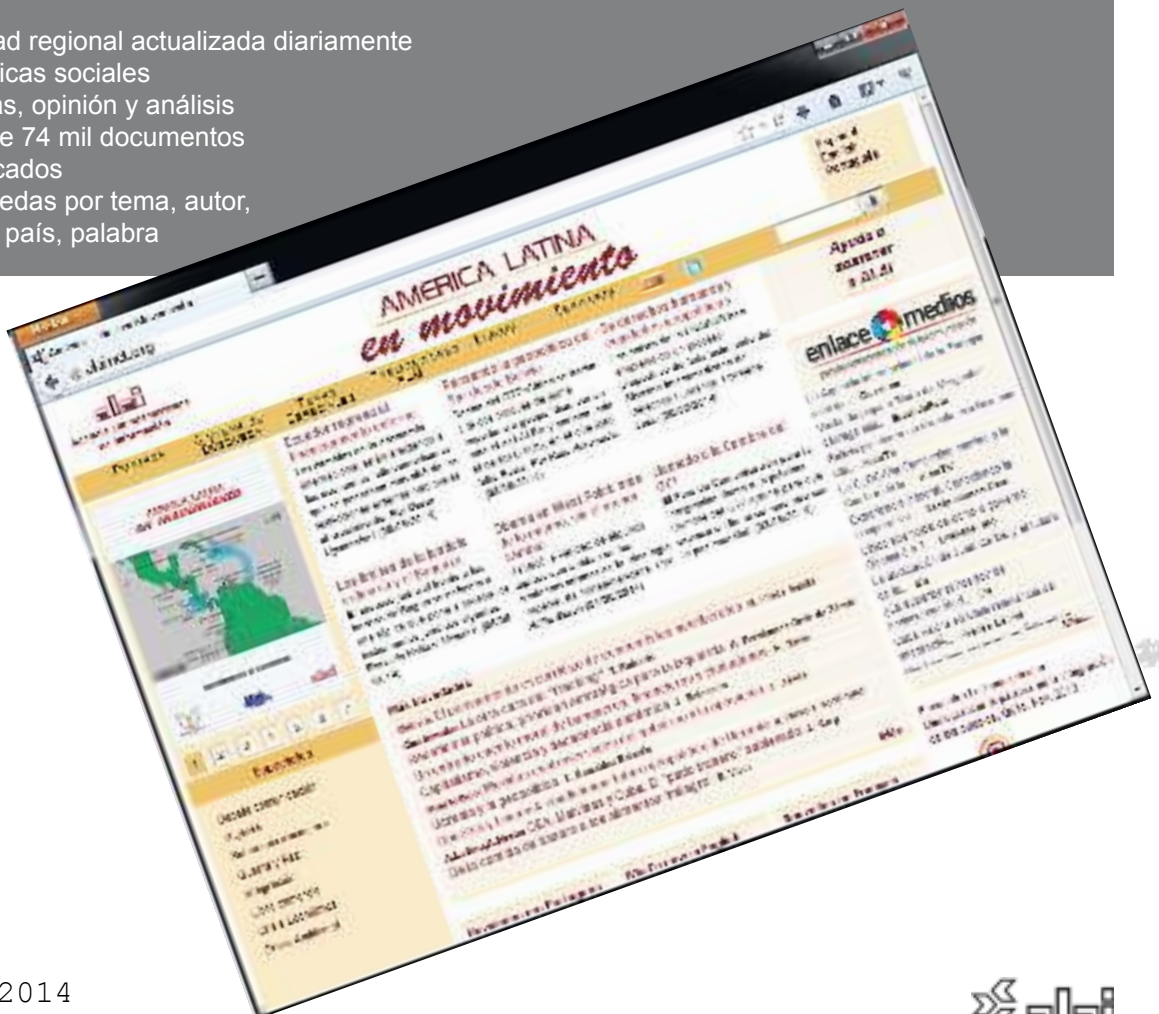
Curitiba, Brasil, 13 de mayo de 2014

a onipresença e a invisibilidade. Rio de Janeiro, outubro 2013, cita p. 2. http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Agricultura_camponesa_entre_a_onipresenca_e_a_invisibilidade.

9 Rosa, João Guimarães. Discurso pronunciado en la Academia Brasileña de Letras - ABL. Río de Janeiro, 11 de noviembre de 1967, últimos párrafos.

www.alainet.org

- realidad regional actualizada diariamente
- dinámicas sociales
- noticias, opinión y análisis
- más de 74 mil documentos clasificados
- búsquedas por tema, autor, fecha, país, palabra



La agricultura campesina en Ecuador y sus potencialidades

François Houtart

En este año de la Agricultura familiar de las Naciones Unidas, la cuestión se discute también en el Ecuador. Por eso veremos, en primer lugar, cuál es la situación, para abordar después el estado de las políticas y las posibilidades del país de avanzar en este dominio.

El panorama ecuatoriano

Al comenzar este siglo, el 44 % del territorio estaba dedicado a actividades agropecuarias y el 56 % a vegetación natural y selva (Atlas, 2011: 6). Las dos Reformas agrarias de 1964 y 1973 cambiaron la estructura tradicional de las grandes haciendas, para modernizar el sector. La época neoliberal provocó una nueva concentración de tierras y también una aceleración de la deforestación: entre 1990 y 2000, 74.300 hectáreas por año y entre 2000 y 2008, 61.800, por año. En 10 años (2000 a 2010) eso significó una pérdida de 618.000 hectáreas (Atlas, 2011:3), por extensión de la frontera agrícola, de las actividades petroleras o mineras y de la urbanización. Con el Gobierno actual un esfuerzo de reforestación se inició. Para 2014, el Ministerio de Agricultura anunció que se trataba de 100.000 hectáreas (Telégrafo, 27.04.14). Un programa de conservación empezó en 2008, "Sociobosque", desgraciadamente dentro del dudoso programa europeo del mercado de carbono.

14

El acceso a la tierra es uno de los más desiguales del continente, con un coeficiente de Gini (que mide la diferencia entre las grandes y pequeñas propiedades) de 0,81. El 46,3 % de las tierras son propiedad del 0,68 % de la población nacional (Revolución Agraria, 2011:5). Las propiedades de menos de 5 hectáreas representan el 64 % de las unidades y el 6,53 % de las superficies (promedio de 1,4 hectá-

reas). Las de más de 500 hectáreas, constituyen el 0,16 % de las unidades y el 16 % de las tierras (promedio de 1.400 hectáreas). Los minifundios, de menos de 0,5 hectáreas que son 165.000 en el país, es decir la mitad de las pequeñas propiedades, no permiten la reproducción social del campesino y constituyen una zona de pobreza. La situación no cambió fundamentalmente desde el último censo agrario de antes del Gobierno de Alianza País: en 2014, las unidades de producción de menos de 10 hectáreas eran el 76 % del total, pero ocupaban el 12 % de las tierras de agricultura (Víctor Mendoza Andrade, Telégrafo, 06.05.14).

Según los datos del INEC del 2007, el 61,5 % de la población rural vivía en la pobreza y según la FAO, la desnutrición al nivel nacional afectaba al 18,1 % de la población, al 26,1 % en zonas rurales y al 40,1 % entre los indígenas (Revolución Agraria, 2011:3). Además, con las políticas neoliberales apareció la categoría de los campesinos sin tierras (Atlas, 2011:16). Con el Gobierno actual, la pobreza rural pasó entre 2006 y 2013, del 60,6 % al 40,7 % (Telégrafo, 18.11.13). Eso fue el resultado, en su mayor parte, del Bono de Desarrollo Humano y también de políticas generales de adecuación entre la canasta básica y el ingreso (96,6 % en 2013) y de un mejor acceso a servicios públicos de salud y de educación. No fue, sino en una pequeña medida, el fruto de un mejoramiento de la producción de la agricultura familiar. Según el SIGTIERRAS (Sistema Nacional de Información y de Gestión de Tierras Rurales), el 50 % de las tierras son mal utilizadas (Telégrafo, 06.10.13) y el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) afirma que solamente un 35 % de las semillas son certificadas (Telégrafo, 27.10.13). Significa

que grandes progresos son posibles.

Evidentemente las funciones de los diversos tipos de propiedad son diferentes. La pequeña agricultura es abastecedora de los alimentos para la población, generalmente con una diversidad de productos y un sistema rotativo. Respeta mucho más los ritmos de la naturaleza y se preocupa de la regeneración de los ecosistemas. Las grandes unidades se destinan a cultivos permanentes, de monocultivo (bananos, palma africana, caña de azúcar, piñón) destinados principalmente a la exportación y muy a menudo ocupan las tierras más fértiles (Revolución agraria, 2011:4). En 2012, el 46,5 % del cultivo estaba destinado a este fin y la tendencia es al aumento (Telégrafo, 06.05.14), poniendo en peligro la soberanía alimentaria (Telégrafo, 27.03.14). El desarrollo de cultivos para los agro-combustibles acentuó el fenómeno: en Santa Elena se consagra 40,000 hectáreas para la producción de etanol. En el norte, la extensión de la palma africana afecta gravemente la vida y el entorno de los Awás. En 2013, hubo un consumo de 79 millones de galones de agro-diesel en el país, pero el fin principal es exportar.

Los monocultivos utilizan una gran cantidad de productos químicos (F. Houtart y M.R. Yumba, 2013: 290) para aumentar su productividad, con consecuencias negativas sobre la contaminación de los suelos y del agua y sobre la salud de los trabajadores y de la población. Tienden también a absorber la pequeña agricultura, por apropiación de tierras o por contratos. Dan menos empleo: 0,5 por hectárea para las unidades de 500 hectáreas y más, frente a 1,4 para las propiedades de 5 hectáreas (Atlas, 2011:24).

Debemos añadir que para la comercialización de sus productos, las pequeñas unidades de producción dependen mucho de “intermediarios” de diferentes escalas de operación, y que el mayor poder se halla en manos de las grandes empresas que, con su control de la distribución y venta mayorista, minimizan los réditos económicos del productor (Revolución

Agraria, 2011:5).

Evidentemente, las comunidades indígenas de la Amazonia tienen una problemática muy diferente, donde el territorio es la base de la actividad de producción agrícola y de la caza.

Hubo en las últimas décadas un proceso de reconcentración de la tierra articulado a la expansión del monocultivo, y del otro lado tenemos un fenómeno de minifundios. En las zonas más pobres, se nota también una feminización del campo, cuando los hombres salen a trabajar en las ciudades.

El deterioro de los ecosistemas ha sido importante. Las tierras destinadas a la alimentación disminuyeron y la tendencia es a someter la agricultura al capital, tanto para la producción, como para la comercialización, lo que puede también ser un efecto no deseado pero real de la Nueva Matriz Productiva que pone el acento en la exportación.

Iniciativas de agricultura familiar y orgánica y sus posibilidades

Sin embargo, en todo el país existen iniciativas de varios tipos. En Santo Domingo, la reacción campesina para protegerse frente al monocultivo de palma africana fue organizarse para cultivar cacao de manera orgánica. En Riobamba, se organizó la crianza de llamas, como complemento económico de las comunidades indígenas y la iniciativa se extiende a varias regiones del país. Numerosas acciones de economía solidaria se realizan en el campo y también existe un sector de cooperativas importante.

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), existen en el país 3,255 cooperativas (950 de crédito) (Telégrafo, 18.11.13), de las cuales el 71 % está en zonas rurales (Telégrafo, 01.08.13). Dentro de las realizaciones comunitarias se puede citar San Clemente, cerca de Otavalo, donde tanto la producción, como la organización social o el turismo ecológico se combinan. La Coope-

rativa Salinas, en la provincia de Bolívar, es un buen ejemplo de la producción de leche y queso. En la provincia de Morona Santiago se diversifica la economía rural con el ecoturismo. Se trata generalmente de iniciativas locales, que provienen de la base: grupos de campesinos, comunidades indígenas, proyectos de ONGs y, en varios casos, con la ayuda de programas gubernamentales y de entidades descentralizadas del poder (parroquias, cantones, provincias).

De hecho existen en Ecuador muchos elementos para un cambio de política agraria: una voluntad popular, un saber tradicional, ideas concretas de realización e instituciones. La voluntad popular se manifiesta negativamente por una oposición creciente a los monocultivos, como a otras actividades que destruyen la agricultura local y, positivamente, por las iniciativas que hemos citado.

El documento llamado *Revolución Agraria*, apoyado por 48 organizaciones sociales, urbanas y rurales, publicado el 15 de septiembre 2011, contiene propuestas, sintetizadas y elaboradas por el antropólogo Cesar Guillermo Ortiz Crespo. Se eligió un título que permite evitar la ambigüedad del término Reforma Agraria, que, para muchos, significa una simple redistribución de tierras, que desembocan en la multiplicación de minifundios. Según César Ortiz, existen las bases para el desarrollo de una agricultura familiar productiva, no individualista, sino integrada en estructuras de solidaridad económica y social. Se debe también recordar que los campesinos de hoy no son más el grupo del pasado y que muchas actividades nuevas existen en el campo, que no son solamente agrícolas: artesanado, pequeña industria, comercios, actividades culturales, ecoturismo y también contactos con ciudades vecinas. Son factores que evidentemente abren una reflexión holística sobre el asunto.

Existen varias bases institucionales gubernamentales y no-gubernamentales. La Constitución de 2008 y los dos Planes Nacionales

2007-2013 y 2013-2017 establecen una base de principio. Un desarrollo de agricultura familiar podría utilizar los estudios de la SIGTIERRAS y del INIAP. Existen centros de formación. Para apoyar la producción, se puede citar el Fondo de Desarrollo Rural Marginal del Banco Central; la ayuda en maquinaria del Ministerio de Agricultura (MAGAP); los proyectos de reforestación del Ministerio del Ambiente; la gestión de varios ministerios como: la regulación del agua, las granjas agrícolas, el apoyo al ecoturismo y finalmente el apoyo de la SEPS. En el campo de la comercialización hay el Banco de Desarrollo, el Seguro agropecuario, y también la SEPS. Sin embargo se debe señalar la relativa debilidad de estas instituciones: el INIAP tiene 47 técnicos para todo el país, el SEPS tiene un presupuesto de 25 millones de USD y el propio MAGAP de 300 millones para 2014 (electricidad y energía no-renovable, 1,867; Defensa 1,701; Policía, 1,114; Transporte y Obras públicas, 1,335) (Vistazo, 30.01.14). Además, se señala también dificultades de coordinación (Revolución Agraria, 2011:16).

En conclusión, podemos decir que las potencialidades de una agricultura campesina existen en Ecuador, pero son dispersas, poco apoyadas institucionalmente y en peligro de disminución frente a un doble fenómeno. Primero, una política agraria que privilegia la exportación en función de la Nueva Matriz Productiva y, segundo, una lucha contra la pobreza rural, que no promueve el apoyo a la agricultura familiar, sino que privilegia una parcial redistribución en el ingreso, pero no una redistribución en la estructura agraria, política tal vez eficaz a corto plazo, pero que no crea actores sino clientes. Existe una preocupación en este sentido en varios lugares del abanico político. Ojala que se traduzca en programas efectivos, porque hay urgencia.

Bibliografía (aquí)

François Houtart, sociólogo, fundador del Centro Tricontinental (Lovaina-la-Nueva, Bélgica), es Profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.

Conflicto agrario y movimiento campesino en Paraguay

Elsy Vera

Durante las últimas décadas en América del Sur se dieron importantes movilizaciones y revueltas sociales de campesinos e indígenas por la consolidación de sus territorios, avances legales, nacionales y regionales. Paralelamente se observa una mayor urbanización como expresión de “modernidad”. Sin embargo, *los avances conseguidos por la población rural están en retroceso y se ven permanentemente amenazados y asediados por las prácticas “modernas” y empresariales, impuestas por un “modelo” de desarrollo agroindustrial y extractivista que cuestiona la viabilidad de la agricultura familiar y la economía indígena y campesina*¹.

En Paraguay, por ser un país que basa su economía en la ganadería y en la agricultura, la tierra es un bien imprescindible. Además de ser un recurso productivo, genera poder político y económico a una minoría dueña de grandes extensiones. Para el campesino y la campesina, en cambio, es un medio de vida, es parte de su identidad, de su cultura, es el Tekoha (lugar, territorio) donde se desarrolla el Teko (modo de ser). El acelerado proceso de acaparamiento de la tierra por parte de los gestores del agronegocio, desde la década del 2000, produce graves consecuencias sobre la población campesina, afectando a su modelo productivo, su medio ambiente y la biodiversidad.

El derecho a la tierra, una de las demandas

históricas del campesinado y sobre el cual sucesivos gobiernos han hecho permanentes promesas, continúa siendo uno de los desafíos centrales en el actual proceso de desarrollo agrario. Las familias campesinas y los pueblos originarios, verdaderos sujetos de la reforma agraria y del desarrollo rural, son víctimas de un modelo de desarrollo que produce despojo y carencias, además de la contaminación de sus comunidades con los agroquímicos utilizados en total contravención de las normas ambientales.

Desde la caída de la dictadura (1989), las organizaciones campesinas y de sin tierras emprendieron una intensa lucha por la tierra, con la cual lograron la habilitación de varios asentamientos rurales en todo el país. La Encuesta Agropecuaria del 2002 realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), muestra un considerable aumento de las fincas campesinas, en la década de 1990 y principios del 2000. Dichos aumentos se dieron en parcelas de 5 a 10 hectáreas y de 10 a 20 hectáreas². Desde la Encuesta Agropecuaria del 2002 hasta el Censo Agropecuario 2008, se observa un proceso de debilitamiento en la agricultura campesina por la disminución de las parcelas y por el incremento o la expansión de la agricultura empresarial. La superficie sembrada de soja pasó de 1.550.000 hectáreas en el 2003 a 1.936.000 hectáreas en el 2004, un incremento de 386.000 hectáreas en sólo un año³.

17

1 Dobrée, Patricio. Presentación en Dobrée, Patricio *La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos*.

2 MAG. *Encuesta Agropecuaria 2002* y CAN 1991

3 www.capeco.org.py

La expansión de la frontera agropecuaria favoreció íntegramente a los medianos y grandes productores, lo que sumado a la ausencia de programas de desarrollo por parte del Estado para el sector de la agricultura campesina, genera una mayor concentración y polarización entre ésta y la agricultura empresarial.

Lucha por la tierra, principal foco de tensión

La negativa de la expropiación de un latifundio de 22 mil hectáreas de tierras pertenecientes a un empresario brasileño, en los departamentos de San Pedro y Canindeyú en el 2011, marca el reinicio de la lucha por la tierra. Las organizaciones campesinas reactivan las ocupaciones, como única alternativa de acceso a la tierra. La Liga Nacional de Carperos, una organización de sin tierras fundada en el año 2011, y otras organizaciones históricas, comenzaron a presionar sobre las grandes propiedades, especialmente las consideradas malhabidas, tierras usurpadas por personas no sujetas de la reforma agraria.

Ante esta nueva ofensiva del movimiento sin tierras, el sector oligárquico reacciona corporativamente frente a la amenaza de las ocupaciones e inicia una fuerte campaña de defensa de sus intereses y contra las posibles acciones estatales de recuperación de tierras malhabidas. El discurso se fundamenta en la incapacidad del ente regulador en reasignar tierras ya colonizadas y la corrupción que permea las compras de tierras.

Durante el 2013 y en lo que va del 2014, el conflicto por la tierra continúa aunque no con la intensidad de años anteriores. La fuerte campaña mediática emprendida por los medios de comunicación comerciales y por los grupos de poder económicos, por el caso Curuguaty, en el sentido que los campesinos son los culpables de ocasionar este tipo de acciones, tuvo su influencia en la disminución de ocupaciones. La tragedia fue utilizada por el ministerio público y por la policía para etiquetar a los campesinos como peligrosos y para evi-

denciar la necesidad de extremar los recursos de la fuerza represiva para otras eventuales acciones.

El trágico suceso de Marina Cué muestra que la justicia y el Estado en general sólo están para defender los intereses de la clase que tiene el poder político y económico. Pese a las denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos, y por organizaciones sociales y políticas nacionales y extranjeras, el juzgamiento no tuvo un tratamiento adecuado e imparcial.

Agronegocios y desnutrición

La incursión del agronegocio y la falta de acceso a la tierra por parte de las familias campesinas, también afectan el derecho a la alimentación. La superficie que ocupa el monocultivo de la soja, según la zafra 2013/2014, es de 3.300.000 hectáreas, mientras que la superficie destinada a la agricultura campesina es apenas de 1.243.475 hectáreas, lo que equivale al 4% del total de superficie destinada a la producción primaria⁴. Esta tendencia muestra que la producción de alimentos, tanto para el auto sustento como para abastecer a la población, está disminuyendo considerablemente.

Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Paraguay se ubica en el tercer lugar de los peor nutridos de toda América, superado solo por Guatemala y Haití, según el Mapa Mundial del Hambre 2012, elaborado por este organismo internacional. Este estudio revela que el 25,5 por ciento de la población paraguaya hoy día no está bien nutrida⁵.

En este proceso de producción de alimentos, las mujeres rurales tienen un rol fundamental, son las principales encargadas de producir y procesar los alimentos cotidianamente. Sin embargo, su aporte real a la producción y a

4 CDE. *Informativo Campesino* N° 253.

5 <http://www.foodwewant.org/por/Noticias/Mapa-Mundial-del-Hambre-2012>.

la economía no está visibilizado como tal. Es así que, según el Censo Agropecuario 2008, las mujeres productoras sólo llegan al 22%, mientras que los hombres figuran con el 78%. No cabe dudas que ellas participan activamente dentro de la agricultura campesina, sin recibir ninguna remuneración por su fuerza laboral ni el reconocimiento social y económico, pues su trabajo es considerado como una ayuda para la familia.

El avance del agronegocio sobre los territorios campesinos e indígenas, abre otro foco de tensión a las organizaciones campesinas, de mujeres e indígenas. El uso sin control de agroquímicos ligado a este tipo de agricultura afecta no sólo los suelos, las fuentes de agua y la biodiversidad, sino también a los cultivos de las poblaciones, a la cría de animales menores y a la salud, con la aparición de enfermedades que antes no existían con la intensidad y complejidad con la que se dan ahora, como las afecciones estomacales, de la piel, dolores de cabeza, hipertensión, entre otras.

Frente a esto, el Estado no ha puesto ninguna restricción, el avance es progresivo y la exposición de la población a estos peligrosos productos es cada vez más masiva.

Además de la desigual distribución de la tierra, las políticas públicas priorizan cada vez más el agronegocio, favoreciendo su expansión y la marginalización de la agricultura campesina, especialmente de las mujeres productoras y la población indígena. “Los programas e incentivos estatales para la producción agropecuaria han favorecido a las élites empresariales, las cuales han podido aprovechar mejor las nuevas oportunidades, acumulando cada vez más activos y poder político. Este sesgo agroexportador se da prácticamente en todos los países de América del Sur, si bien la magnitud del problema no es igual de aguda en todos ellos”⁶.

6 Guereña, Arantxa 2013. *El espejismo de la soja. Los límites de la responsabilidad social empresarial: El caso de Desarrollo Agrícola del Paraguay* (Oxfam, Asunción).

Las instituciones públicas responsables de velar por el cumplimiento de las leyes ambientales no han cumplido su misión, además han actuado en contravención a las mismas. Las comunidades campesinas que han sido avasalladas por el agronegocio y que han reclamado el cumplimiento de las normativas ambientales, levantando su voz de protesta, tratando de poner límites a las fumigaciones permanentes, han sido criminalizadas. Los dirigentes y dirigentas de las comunidades y asentamientos afectados por el avance del agronegocio, y que han tratado de defender sus comunidades, fueron y están siendo perseguidos/as e imputados/as por las mismas instituciones responsables de cumplir el mandato de la ley.

Conclusión

El acelerado proceso de concentración de la tierra por actores y sectores del agronegocio y de la ganadería, seguirá siendo una de las principales causas de conflictividad en el campo. A esta extrema desigualdad en la distribución de la tierra, se suma el avance del monocultivo de la soja que usurpa el territorio a los campesinos paraguayos y a los pueblos indígenas, obligándolos a migrar a las periferias de las ciudades. En Paraguay, este proceso de migración campo-ciudad continuará sin pausa en la misma medida en que la agricultura campesina vaya perdiendo tierras a favor del agronegocio.

El reconocimiento de la agricultura campesina como principal proveedor de la producción de alimentos sanos y diversificados a la población, lo debe tener en cuenta el Estado y específicamente las instituciones responsables de este sector productivo. Así también, el reconocimiento del trabajo femenino en la agricultura es clave para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

La degradación del medio ambiente como consecuencia del uso intensivo de los recursos naturales pone en peligro la capacidad de la tierra para seguir produciendo alimentos y otras necesidades de la humanidad. Cada vez

hará falta mayor cantidad de alimentos, forrajes y combustibles para lo cual el recurso tierra es fundamental.

Frente a estos desafíos, urge seguir buscando salidas jurídicas, así como modelos de producción adecuados que permitan a los campesinos y campesinas el desarrollo de una vida digna en lo que respecta a la seguridad y soberanía

alimentarias y al derecho de vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, como manda la Constitución Nacional.

Elsy Vera, comunicadora social paraguaya, trabaja como investigadora y corresponsable del Informativo Campesino, del Área Sociogremial del Centro de Documentación y Estudios (CDE).



Este libro recoge tanto posicionamientos de coordinaciones y organizaciones sociales, como plataformas comunes y normativas legales que están abriendo brecha para que esta conquista se haga realidad, junto con el reconocimiento pleno del Derecho a la Comunicación

Democratizar la palabra **Movimientos convergentes en comunicación**

edición digital en www.alainet.org/publica/democom
edición impresa: América Latina US\$25,00 - Resto Mundo US\$30,00

La agricultura campesina en Ecuador y sus potencialidades, François Houtart

(viene de la página 16)

Bibliografía

Atlas - *Tenencia de las Tierras en el Ecuador*, (2011), SIPAE, Quito

Constitución 2008. Título II (Derechos), capítulos 2 (Derechos del Buen Vivir), Título VI (Régimen de Desarrollo), capítulo 3 (soberanía alimentaria), Título VII (Régimen del Bien Vivir), capítulo 2 (Biodiversidad y recursos naturales).

Houtart, Francois y Yumba, Rosa Maria (2013), *El Brócoli amargo*, *Ciencias Sociales*, Número 35, 283-300).

Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013). Sección 8 (Estrategia Territorial Nacional), Num. 8.4 (Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria)

Revolución Agraria (2011), Colectivo de Reflexión y Acción Política (CReAPP), Quito

Regresa al texto

Zapata vive, la lucha sigue...

En un campo que resiste

Emilio García

El retorno del PRI al gobierno mexicano representa el relanzamiento del modelo económico neoliberal con las mismas recetas privatizadoras de los años ochenta, solo que con dosis mayores ante el desastre económico y social heredado por los sexenios panistas, que no pudieron llevar a cabo los cambios estructurales regresivos que tanto deseaban. En efecto, el gobierno de Peña Nieto, para tranquilizar al enfermo, puso en marcha programas asistenciales, como la Cruzada contra el Hambre (mala copia de *Hambre Cero* de Lula en Brasil), al tiempo que impone reformas estructurales regresivas para *modernizar* la educación, las finanzas, las comunicaciones, la extracción y procesamiento de hidrocarburos y la explotación de recursos naturales en general.

Con medidas más agresivas -antipopulares, pero eficaces-, como las reformas constitucionales para abrir las puertas al gran capital y entregar la renta petrolera a las transnacionales, ahora se da continuidad al sueño primermundista de Salinas de Gortari, quien hace dos décadas clausuró la reforma agraria, privatizó la mayor parte de empresas paraestatales y proclamó la entrada de México al mundo del libre comercio.

Hace veinte años el sector agrícola sufrió el más fuerte castigo de las políticas neoliberales. La imposición del Tratado Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue un ataque artero y perverso del salinismo contra millones de pequeños productores agropecuarios, que fueron impotentes ante el desmantelamiento de la agricultura familiar, la infraestructura rural y los mercados locales.

Una vez echado a andar el TLCAN, el gobierno mexicano se negó sistemáticamente a gestio-

nar ante Estados Unidos y Canadá la revisión del capítulo agropecuario de ese tratado y que se sacara del mismo al maíz por tratarse de un alimento básico para el pueblo mexicano. Justo en el momento en que entró en vigor el tratado, el 1° de enero de 1994, se produjo el levantamiento indígena del EZLN en los Altos de Chiapas. Pese a la gran movilización que generó a nivel nacional e internacional, el gobierno solo atendió algunas de las demandas de los zapatistas, pero sobre el TLCAN nada se tocó. Haciendo oídos sordos al reclamo de miles de campesinos en las calles, los presidentes Zedillo y Fox prefirieron sacrificar al sector social y a los pequeños productores agropecuarios, antes que afectar parte de las ganancias de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales.

En 2003, el Movimiento el *Campo no Aguanta Más* movilizó a cientos de miles de campesinos que salieron a las calles y tomaron carreteras, logrando la firma presidencial de un Acuerdo Nacional para el Campo que no fue cumplido por el gobierno.

Deficiencias alimentarias

A la fecha, nada ha cambiado en las políticas gubernamentales; el campo sigue en estado coma, con la soberanía alimentaria perdida y con una dependencia del exterior cercana al 50 por ciento; con una crisis alimentaria que afecta a 28 millones de mexicanos, que no se resolverá con una Cruzada Contra el Hambre, basada en el asistencialismo y el clientelismo político. Revertir la dependencia alimentaria actual requiere un modelo de desarrollo que privilegie la producción nacional de alimentos, y no de dinero, como lo hacen los grandes monopolios agroalimentarios.

Hace tres décadas éramos autosuficientes y exportadores de granos, pero con el desmantelamiento de la agricultura campesina, la desintegración de cadenas productivas y del pequeño comercio, actualmente dependemos del exterior en un 95% de soya, 60% de arroz, 49% de trigo y en más de un tercio del maíz que consumimos. La competencia desigual y los precios de *dumping* de las transnacionales de EEUU y Canadá han derrumbado los precios de nuestros productos básicos, como el maíz y el frijol. Esto no beneficia ni a los productores ni a los consumidores, pues con el encarecimiento de los insumos agropecuarios, es inviable para los pequeños agricultores la producción de alimentos básicos y los precios para los consumidores están a merced del intermediarismo y la especulación de las grandes cadenas comerciales.

El costo de la canasta básica de los mexicanos se incrementó desde que entró en vigor el TLCAN en más de 250 %, por lo que a millones de campesinos y sus familias no les queda otra opción más que consumir *alimentos chatarra*, que han incrementado la obesidad y enfermedades como la diabetes y males cardiacos. El encarecimiento de la canasta básica no es correlativo al aumento del ingreso de los consumidores, más bien es reflejo de una grave pérdida del poder adquisitivo, del crecimiento y feminización de la pobreza y el desempleo en el campo. Hoy los mexicanos consumimos menos tortillas, menos frijol y, por supuesto, menos cárnicos y lácteos.

El frijol y el maíz han sido la base de nuestra cultura alimentaria. Por eso es preocupante que si en 1980, los mexicanos consumíamos 18 kilos de frijol per cápita al año (12 % de la energía y 11 % de las proteínas), hoy cada persona consume al año sólo 10 kilos de la leguminosa y obtiene de ella menos de 7 % de su energía y 6 % de proteínas. Informaciones periodísticas recientes señalan que México es el segundo país en América Latina que más redujo el área para cultivar maíz y el último en el porcentaje de abatimiento de la pobreza.

La disminución del consumo de frijol, tortillas, frutas y hortalizas puede traer graves consecuencias en el desarrollo físico y mental de varias generaciones. La alimentación tiene una relación directa con el aprendizaje; al respecto, investigadores en materia alimentaria sostienen que el 80 por ciento de los resultados del aprendizaje, corresponden a las condiciones de vida de las familias, es decir, que las condiciones del fracaso escolar son, en alto porcentaje, resultado de las condiciones sociales y económicas de las familias.

A la falta de empleos y el déficit alimentario hay que agregar el déficit educativo y la inseguridad. Estos son los aspectos, para los que la Cruzada contra el Hambre no plantea alternativas. Para el impulso de la producción de alimentos básicos, sólo se cuenta con los programas que han venido operando en la última década, con exiguos recursos, con reglas de operación excluyentes y corruptelas en su aplicación. Con estos programas es imposible frenar el flujo migratorio del campo a la ciudad y al extranjero, la feminización del campo y la pobreza, la proliferación de actos delictivos, así como el reclutamiento de jóvenes desempleados y sin futuro por la delincuencia organizada.

Para frenar el creciente descontento y la movilización social, el Estado mexicano aplica diversos mecanismos de cooptación y de mediatización de las organizaciones campesinas. Aun los partidos políticos que se asumen de izquierda, contribuyen al diseño y aplicación de programas asistenciales *domesticadores* de expresiones radicales de movimientos sociales. Lo que se busca es mantener la inercia ideológica, hacer que las organizaciones se conviertan en colaboradoras de la burocracia a cambio de prebendas o proyectos que fortalecen poderes fácticos.

Cuando la cooptación no es posible, se aplica el recurso terso de la exclusión y el recurso violento de la represión, como ya ha sucedido en estados como Oaxaca, Chiapas, Campeche, Guerrero y otras entidades, donde han sido

asesinados varios dirigentes campesinos e indígenas.

El movimiento campesino

A una década de las jornadas del Movimiento El Campo no Aguanta más, las organizaciones campesinas mexicanas muestran dispersión y pocas acciones conjuntas. Existen actualmente cuatro bloques: el Congreso Agrario Permanente (CAP), Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Frente Auténtico del Campo (FAC) y fuera de estos la UNORCA y El Barzón. Las organizaciones del Frente Auténtico del Campo (CNPA, CIOAC, UNTA y CODUC), junto con el Barzón y el FDC en Chihuahua, han realizado bloqueos de puentes internacionales y carreteras, marchas en la ciudad de México en homenaje a Zapata y tomas de oficinas de dependencias federales.

La última semana de mayo, el grupo *Carnaval del Maíz* y la Campaña sin Maíz no hay País, realizaron una marcha en la ciudad de México contra la entrada al país de semillas transgénicas. Estas mismas redes lograron, a través de una demanda colectiva, la suspensión de permisos por parte de la SAGARPA y SEMARNAT para la siembra experimental y comercial de maíces transgénicos. Por su parte, las organizaciones campesinas del FAC, los días 27 y 28 de mayo, realizaron una marcha y plantón de unos 10 mil campesinos frente a las Secretarías de Gobernación, SAGARPA, SEDESOL y Economía. En dicha movilización manifestaron su rechazo a la reforma del campo que pretende imponer el gobierno de Peña Nieto; exigieron que en la agenda de los foros se incluyan temas sobre la agricultura campesina sustentable, la defensa de las semillas nativas y prohibición de la distribución y uso de semillas transgénicas. Propusieron la realización de foros alternativos, ante la evidencia que con los foros oficiales se trata de legitimar lo que ya está decidido por el gobierno y la oligarquía.

La tan publicitada reforma del campo trata de quitar lo que todavía estorba para la privatización de la tierra, es decir la propiedad social que representan ejidos y comunidades agrarias. La reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992 no fue suficiente para abrir al mercado nacional e internacional los 100 millones hectáreas en manos de campesinos e indígenas. Por ello, una vez entronizada en todos los poderes y niveles de gobierno la élite del sector privado, se buscarán todos los medios para completar esa tarea tan esperada por los agronegocios nacionales y extranjeros.

En los próximos días el Congreso discutirá las leyes secundarias para la reforma energética, que, sin duda, se aprobarán en medio de movilizaciones de trabajadores, estudiantes, maestros y campesinos, pero sin que el PRI-gobierno detenga su marcha hacia la entrega del país y su riqueza al capital privado.

La agenda de los movimientos sociales prioriza la lucha por la soberanía alimentaria, por el derecho a la alimentación, por la defensa de los recursos naturales, la defensa de la agricultura campesina, la tierra y el agua; la defensa de nuestras semillas nativas, la democracia y la seguridad.

Parte importante de la defensa de la agricultura campesina es la lucha por el fomento de la producción agroecológica, la defensa del medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra. En el aspecto educativo y formativo se han creado escuelas y centros de capacitación, universidades campesinas y redes de productores ecológicos con sus propios mercados locales.

Y como un nuevo esfuerzo unitario del movimiento campesino, varias organizaciones, como la CNPA, CIOAC, CODUC, UNTA, El Barzón y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, están convocando a la *Toma de Zacatecas* para el 23 de junio, cuando se cumplirán cien años desde que las tropas del general revolucionario Francisco Villa derrotaron a las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta,

en 1914. En esta movilización nacional participarán organizaciones campesinas del sur y sureste del país para unir simbólicamente al zapatismo con el villismo. Posteriormente, en diciembre, estas mismas organizaciones tienen proyectado tomar simbólicamente la ciu-

dad de México, tal como lo hicieron las tropas de Villa y Zapata hace cien años.

Emilio García es Director de la Universidad Campesina del Sur y miembro del Consejo Consultivo de la CNPA

www.movimientos.org



Declaración de Movimientos y Organizaciones Sociales ante 33va. Reunión FAO-ALC

Nosotros y nosotras, mujeres y hombres, representantes de 52 organizaciones de la agricultura campesina, familiar, indígena, de la pesca y la acuicultura artesanales, de pastoreo, de asalariados agrícolas y de la sociedad civil, de 19 países de todas las subregiones de nuestra América Latina y el Caribe, estuvimos reunidos en Santiago de Chile, los días 4 y 5 de mayo, en la Consulta de la Sociedad Civil para la 33 Conferencia Regional de FAO, organizada por la Alianza por la Soberanía de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe.

Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la Soberanía Alimentaria para continuar desarrollando la producción a pequeña escala de alimentos saludables y culturalmente apropiados, lo que es clave para erradicar el hambre y la pobreza.

Sabemos que el hambre y la pobreza son dos grandes dilemas que todavía debe resolver la humanidad y que está ampliamente demostrado que el modelo de producción y comercialización de alimentos en una agricultura de tipo industrial, de gran escala, basada en monocultivos de especies transgénicas y sustentada en la utilización de fertilizantes químicos y plaguicidas y dominado por las Empresas Transnacionales no solo no ha resuelto el hambre y la pobreza sino que ha profundizado estas problemáticas.

Creemos que ha llegado la hora de que los gobiernos y los organismos internacionales escuchen a las voces de los Pueblos. El hambre y la pobreza son consecuencias de la ausencia de soberanía alimentaria a la que están sometidas las poblaciones desde hace siglos.

Por eso para nosotros y nosotras, participantes de esta Consulta, la 33 Conferencia Regional de FAO debe marcar un cambio en el abordaje de la producción de alimentos saludables en América Latina y el Caribe, reafirmando que:

El alimento es un derecho básico e intrínseco de la humanidad y no una mercancía al servicio de la acumulación del capital. Los bienes comunes (océanos y aguas interiores, tierra, semillas y el resto de la biodiversidad para el sustento) deben ser considerados patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

El desarrollo de los países de América Latina y el Caribe no puede continuar basado en las grandes empresas de los agronegocios y del extractivismo industrial a gran escala, ni en los intereses de las grandes corporaciones de dichos sectores. Ese modelo expulsa a los pueblos de sus territorios, promueve conflictos que han provocado pérdidas de vidas; contamina y destruye el suelo, los mares y aguas interiores, el aire y es causa de altos índices de enfermedades en los los trabajadores del campo y de la ciudad.

La Agricultura Familiar Campesina, Indígena, y la pesca y la acuicultura artesanales han sido avasalladas por el modelo capitalista que apostó a destruir sus culturas para generar la dependencia de los pueblos, basándose en la competencia desleal, la especulación y el individualismo. Su capacidad de resistencia y resiliencia posibilitó y posibilita continuar generando alimentos sanos para los pueblos del mundo entero. Estos alimentos no llegan a todas y todos por la concentración del poder, de los medios de producción y la distribución en manos de grandes corporaciones agroquímicas y biotecnológicas como Monsanto, Bayer, Dow, Du Pont/ Pionner y Syngenta, que se apropian

de la renta del trabajo de millones de trabajadoras y trabajadores e imposibilitan el acceso a los alimentos a millones de personas.

Estudios nuestros y oficiales, incluso de la FAO, comprueban que la producción de alimentos a pequeña escala ha demostrado ser más productiva y que alimenta al menos al 70% de la población mundial. Todo esto a pesar de las dificultades que enfrenta y al poco apoyo de los Estados. Además es la responsable de mantener la diversidad de culturas ancestrales y tradicionales, por la protección y conservación de los bienes naturales y la biodiversidad.

Los gobiernos y los organismos internacionales no deben permitir nunca más los ataques y la violación a los derechos humanos producidos por el agronegocio. En el campo existen altos índices de violencia hacia las mujeres, persecución y asesinato de campesinos y campesinas e indígenas y de trabajadores rurales sindicalizados.

Por eso proponemos que:

- 1- Estados y gobiernos reconozcan y demarquen los territorios indígenas, donde puedan ejercer la protección a los bienes naturales (bosques, agua, suelo, semilla, biodiversidad, espiritualidad) y desarrollar sus sistemas de vida.
- 2- Los Estados y gobiernos implementen una reforma agraria integral para el desarrollo territorial que evite el despoblamiento rural, con políticas públicas para el acceso a hombres y mujeres a la tierra, el agua potable y para riego, infraestructuras, educación para la vida en el campo, salud y comercialización. Es decir, que se promuevan políticas integrales que permitan que los pueblos del campo no tengan que emigrar para reproducir su vida.
- 3- Para el próximo periodo la FAO priorice la promoción e implementación de políticas públicas que fortalezcan la soberanía alimentaria de los pueblos como camino cla-

ve para erradicar el hambre;

- 4- Los Gobiernos renueven su compromiso de implementación de las Directrices del Derecho a la Alimentación a diez años de su aprobación.
- 5- Se adopten medidas conducentes a difundir los beneficios nutricionales y promover el consumo de productos provenientes de la pesca y la acuicultura artesanales y de las productoras y los productores agrícola-ganaderos de pequeña escala a nivel nacional, sostenible y sustentable. En especial se recomienda su inclusión en los programas de educación y alimentación escolar.
- 6- Los Gobiernos implementen políticas y programas que apoyen el desarrollo del procesamiento de alimentos a pequeña escala, así como la comercialización de los alimentos de manera directa entre productor y consumidor, en el marco de la agroecología y la Economía Social Solidaria. Para ello, se requerirá de programas estatales de subsidios y de compras públicas adecuados a los diversos sectores y enfocados en las necesidades tanto de estos productores como de los consumidores.
- 7- Se prioricen acciones y formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible de la pesca artesanal marina, continental y la acuicultura de pequeña escala enmarcadas en las necesidades específicas de cada país, dada su gran importancia para mejorar los niveles de seguridad alimentaria y nutricional. Además deben contribuir a la evaluación de las pesquerías marinas y continentales que son compartidas en cuencas hidrográficas transfronterizas, en particular el estado de los recursos pesqueros con la participación de las comunidades pesqueras.
- 8- Los Gobiernos aprueben las Directrices internacionales para la gobernanza de la pesca artesanal, en la próxima sesión del

Comité de Pesca de la FAO (COFI).

- 9- Se fomenten políticas para las mujeres que fortalezcan su capacidad de producción, comercialización y sus saberes en la promoción de la soberanía alimentaria. Para ello es necesaria la creación de un programa regional que promueva la igualdad entre hombres y mujeres; garantizando la participación de ellas en la agricultura y la pesca, de acuerdo a la CEDAW, ratificada por los gobiernos.
- 10- Se formulen y apliquen políticas públicas en favor de los jóvenes que les garanticen el derecho a desarrollar su vida en su propio territorio.
- 11- La elaboración de los marcos legales y las políticas públicas se realicen con la participación efectiva de la Sociedad civil, tanto en su discusión, diseño, implementación y monitoreo, reflejando la diversidad de la agricultura familiar, campesina, indígena, no patriarcal y la pesca y acuiculturas artesanales.
- 12- Se garantice el respeto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las productoras y los productores de alimentos a pequeña escala y los trabajadores de la alimentación, implementando políticas en acuerdo con las indicaciones de la OIT sobre Trabajo Decente, erradicando la tercerización y los contratos precarios de los trabajadores temporeros o zafrales y la criminalización de su sindicalización. Los Estados deben cumplir y hacer cumplir las leyes y compromisos internacionales asumidos, e implementar campañas contra el trabajo esclavo y las violencias en el campo.
- 13- Se promueva y apoye mediante políticas específicas la producción de base agroecológica, especialmente en la etapa de transición, reconociendo a su vez la posibilidad de la agroecología de mitigar y adaptarse críticamente al cambio climático.
- 14- Se valoricen los modos de construcción del conocimiento a nivel de las comunidades, conocimiento que se ha establecido y se valida a partir de la mutua relación en y con la naturaleza de la cual formamos parte.
- 15- Se reconozca que las causas del cambio climático se deben a la profundización de un modelo que incluye la producción agroindustrial, ganadera y acuícola basada en monocultivos, el alto uso de agrotóxicos, las semillas transgénicas o híbridas, prácticas forestales intensivas que desplazan a las comunidades, y destruyen culturas y ecosistemas y su biodiversidad, las actividades extractivas a gran escala como la minería y las grandes obras de infraestructura como es la construcción de mega represas hidroeléctricas.
- 16- El abordaje de la Crisis Climática abandone el enfoque sectorial/industrial y pase a un enfoque territorial/social desarrollando políticas de recuperación de ecosistemas degradados, de recuperación de semillas nativas en beneficio de los campesinos, pastores y pescadores artesanales con base agroecológica. Se debe terminar con la lógica del mercado como mecanismo para enfrentar el cambio climático ya que no hay nada más resiliente que una comunidad soberana.

Por lo antes expuesto, creemos que el AIAF debe ser el comienzo de un proceso más largo que permita alcanzar lo arriba planteado, fortaleciendo la Agricultura Familiar, campesina indígena, no patriarcal que desde una perspectiva agroecológica construya la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.

Somos parte de la solución. Nuestro compromiso es contribuir a erradicar el hambre y la pobreza, construyendo la soberanía alimentaria de los pueblos. ☞

Santiago de Chile, 6 de mayo de 2014

CLOC VC: Después de 20 años de luchas, grandes desafíos

Diego Montón y Deo Carrizo

En febrero de 2014 se cumplieron 20 años del primer congreso de la CLOC VC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina), en un contexto donde el debate agroalimentario se ha colocado nuevamente en el centro de la coyuntura de América Latina. Esto por diversos motivos: la ofensiva de las transnacionales sobre los bienes naturales y los alimentos, y la reprimarización de las economías latinoamericanas en función de las divisas que ingresan de la mano de esta ofensiva. Las consecuencias evidentes de este fenómeno son, por una parte, que la tierra y los alimentos están subordinados a los intereses de las corporaciones, lo cual pone en riesgo los procesos democráticos y de integración. Por otra parte, el aumento del hambre a nivel global y la gravedad de la crisis climática ponen de manifiesto que los monocultivos transgénicos son más bien el problema y no la solución.

A tono con esta perspectiva del debate, la FAO declaró al 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), volviendo sobre sus propios pasos y reconociendo el rol central de la agricultura de pequeña escala en la lucha contra el hambre y el desarrollo de los países.

Cabe indicar, de paso, que el 17 de mayo se cumplieron 55 años de la Ley de Reforma Agraria en Cuba, proceso que significó la entrega de tierras a más de 200 mil familias campesinas, y que hoy conforman una valiosísima experiencia de producción agroecológica y soberana de alimentos, en donde antes había latifundios y monocultivos gringos.

Fin de las ideologías y fin del campesinado: La propuesta de las corporaciones

20 años atrás, la FAO sostenía el concepto de que para lograr seguridad alimentaria era necesario el desarrollo del capital en el campo, de la mano de la biotecnología (de las corporaciones) los agronegocios y las grandes maquinarias, conformando lo que denominaron “agricultura industrial”.

Estas teorías se construían desde el pensamiento liberal en el marco de la ofensiva del capital y que coincidían con la tesis del “fin de la historia” de Francis Fukuyama, y de la transición hacia las democracias burguesas luego de feroces dictaduras.

El nuevo paquete ideológico de las corporaciones buscó borrar la identidad campesina y subordinarla al capital financiero, proponiendo para ello el concepto de “agricultura familiar”, una forma de sugerir un lugar en la cadena agroindustrial para los campesinos que serían convertidos en pequeños empresarios de la agricultura. El Banco Mundial lanzó entonces cientos de programas, los cuales suponían que una gran parte del campesinado debía emigrar a las ciudades y que otra (más pequeña) debía insertarse en la cadena agroalimentaria como “agricultores familiares”. Lo llamaron *el fin del campesinado*.

En ese contexto, la resistencia se fortaleció desde las luchas rurales, campesinas, indígenas y negras, por la tierra y contra los TLC:

las luchas de los zapatistas, los sin tierra en Brasil, los indígenas ecuatorianos, los cocaleños de Bolivia, entre otras, pusieron una luz y esperanza, junto al faro que significaba la Cuba Socialista.

Un primer paso en la articulación fue la *Campaña por los 500 años de resistencia campesina indígena negra y popular*, que permitió el encuentro de distintos procesos de lucha y a partir del cual, surgió la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), que sumará organizaciones campesinas de toda Latinoamérica.

La senda campesina indígena y popular

El primer congreso de la CLOC, se realizó en Lima, Perú, con un carácter anticapitalista y antiimperialista. En este evento se expresó la solidaridad con la Revolución Cubana y las luchas en Chiapas, y se vio la necesidad de la articulación continental y la centralidad de la lucha por la tierra. Comenzaba un proceso de articulación popular que iría mucho más allá de los sectores rurales y recuperaría la tradición internacionalista pero desde una nueva perspectiva.

La CLOC permitió mayores análisis conjuntos de la coyuntura agraria y la posibilidad de un plan de acción de alcance continental. Además la formación y la educación de carácter internacionalista contribuyeron a multiplicar las acciones y la militancia campesina. Los cursos de formación en todas las regiones fortalecieron la articulación y las organizaciones nacionales, así como, desde sus inicios la participación de las mujeres y de la juventud.

La comunicación popular jugó un rol clave, permitiendo la difusión de este proceso así como facilitando su dinámica. ALAI, en este campo, fue una gran articuladora, lo cual desembocó en la Minga Informativa de Movimientos Sociales que se constituyó en una importante herramienta comunicacional de la resistencia popular.

Por las propias características globalizadoras del neoliberalismo, la CLOC y sus organizaciones colocaron sus esfuerzos en una construcción de una alternativa global e internacionalista: la Vía Campesina, cuyo lema, “*Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza*”, recorrió el mundo. La Vía Campesina Internacional logró articular la lucha contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el neoliberalismo, y se consolidó como una de las referencias de la lucha global, porque además de resistencia pudo construir propuestas estratégicas como la soberanía alimentaria.

De esta manera, mientras la FAO y la OMC proponían la seguridad alimentaria y agronegocios, la Vía Campesina sostuvo la bandera de la *soberanía alimentaria* como el camino para luchar contra el hambre y la pobreza.

El Caracazo y la consecuente llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela significó un nuevo ciclo para las luchas sociales de América Latina: se fortalece la lucha contra el ALCA, llegando en 2005 a Mar del Plata donde, en un gran acto popular, los presidentes Chávez, Kirchner, Lula y Tabaré pusieron fin a las pretensiones imperialistas de construir un área de libre comercio bajo la hegemonía de Estados Unidos. No solo moría el ALCA, nacía también la posibilidad de volver a soñar con la Patria Grande, y la llegada a la presidencia de Evo Morales y Rafael Correa serían claves para comenzar la construcción del ALBA, la UNASUR y luego la CELAC.

Vivimos avances políticos y culturales históricos; los procesos de integración han potenciado las luchas antimperialistas y propiciado escenarios de hermandad y construcción de la Patria Grande, sin embargo, no hemos logrado revertir la matriz económica; la tierra se ha concentrado y las corporaciones transnacionales avanzan en la mercantilización de los alimentos y la vida.

El V Congreso de la CLOC-VC, realizado en octubre de 2010 en Quito, significó la respuesta a ese nuevo contexto. Cerca de 1000 delegados

y delegadas de más de 80 organizaciones de 22 países nos reunimos para ratificar la vigencia de la articulación de las luchas campesinas en América Latina, con un horizonte socialista, de lucha por la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Caminamos en el marco de las nuevas contradicciones, con gobiernos progresistas y populares que administran estados burgueses y liberales en un mundo globalizado y hegemonizado por la dinámica del capital.

¿Agricultura campesina o agricultura industrial?

El avance de la agricultura agroindustrial transnacional nos permite ver sus consecuencias: campos despoblados y ciudades superpobladas, millones de desocupados, amplios cinturones de pobreza y marginalidad, verdaderas causas del aumento de la violencia. Además de la destrucción de bosques ríos y montañas, contaminación y envenenamiento con agrotóxicos, trabajo esclavo, alimentos caros y contaminados...

Pero quizás lo más grave es el control de los alimentos por las corporaciones, en su guerra por el control total del Planeta.

La subordinación de los bienes naturales y la distribución de los alimentos a las corporaciones vuelve vulnerables a los procesos democráticos: los desabastecimientos y la desestabilización financiera, la retención de la producción, vuelven a ser materia corriente, como aquel preámbulo al derrocamiento de Salvador Allende en 1973.

Por eso, este “Año de la Agricultura Familiar” debemos abordarlo con el contenido y el significado de esta disputa: *agricultura campesina indígena*, para construir *soberanía alimentaria*, o *agricultura industrial* de la mano de las transnacionales para volver a someter a nuestros pueblos al saqueo y el neocolonialismo.

Es urgente fortalecer el proyecto campesino y popular, de manera de consolidar la *soberanía alimentaria*, la democracia y la paz en la región.

Eso solo será posible con una *reforma agraria* que democratice la tierra en el continente y permita el desarrollo de la agricultura campesina. Que ponga la tierra y la agricultura en función del proyecto latinoamericano y popular. Una *reforma agraria* que signifique la vuelta al campo de millones de familias que hoy no encuentran esperanza en las ciudades.

Rumbo al VI Congreso Continental de la CLOC-VC, los desafíos son enormes. La lucha por la tierra y la vida campesina es, al mismo tiempo, la lucha contra el capital y sus principios, así, la *soberanía alimentaria* solo será posible si es acompañada de proyectos populares que posibiliten nuevas relaciones sociales, donde la economía popular deje de ser marginal y de subsistencia para convertirse en estratégica. Ya no se trata solo de agricultura en pequeña escala, sino de agricultura agroecológica, cuyo destino y misión sea alimentar a los pueblos.

La CELAC, el ALBA, e incluso la UNASUR deben abordar estos debates, con la participación y el protagonismo de los movimientos campesinos indígenas, y del resto de los sectores populares y sindicales. La integración latinoamericana es una condición necesaria para poder romper las cadenas de las corporaciones.

Los avances necesarios no serán posibles tan solo de la mano de “políticas públicas”, sino a través de una ofensiva popular contra las corporaciones, no solo resistiendo desalojos sino avanzando en ocupaciones de tierra; y en las comunidades y tierras conquistadas, avanzar con nuestra propuesta campesina, con técnicas agroecológicas y agroindustria local, donde, sin explotación, la juventud rural tenga trabajo digno. Es clave la movilización y el protagonismo popular en las calles, debatiendo y colocando, desde ahí, nuestro programa, articulando con los sectores urbanos nuevas dinámicas de mercados populares, construyendo, junto a sindicatos y movimientos, organizaciones de “consumidores” que faciliten el acceso a los alimentos.

La lucha contra las leyes de privatización de

las semillas, el uso de agrotóxicos y transgénicos y el trabajo esclavo, debe ser frontal y sin tregua, buscando todas las alianzas posibles.

El mayor desafío es la unidad de los sectores populares, de las y los trabajadores, las y los excluidos, los estudiantes, indígenas campesinos, y de todas las formas sociales en que el neocapitalismo fragmentó a los pueblos; para ello los procesos de formación y de comunicación popular son estratégicos. Reconocernos en las diversas luchas, convertir esas luchas en nuestras luchas. Nuestra gran tarea no es la del corto plazo, es el horizonte, quizás un poco más lejano, por el que debemos caminar,

para seguir construyendo la dignidad, la justicia y la libertad.

Las campesinas y campesinos, indígenas, hemos demostrado, y nos hemos demostrado a nosotros mismos, que, de la mano de la organización y la lucha, con solidaridad, dignidad y memoria, nada puede detener el caminar de los pueblos. ☞

Diego Montón y Deo Carrizo son miembros de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Argentina y de la Secretaría Operativa de la CLOC VC.

AMERICA LATINA *en movimiento*

Reordenando el continente

No. 495, mayo de 2014

Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Sandy E. Ramírez Gutiérrez, David Barrios Rodríguez, Rodrigo Yedra, Daniel Inclán, Juan Bautista Gómez, Dario Azzellini.



